Plaza pública

► *Turbulencias en Chiapas*

► *Conflicto social, intereses mezquinos*

Miguel Angel Granados Chapa

El ayuntamiento de San Pablo Chalchihuitán dirigió la semana pasada una comunicación pública al Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el Procurador de la República. Dan los municipales, en ella, su versión sobre la muerte de once personas, ocurrida en ese lugar a fines de marzo. Dice el comunicado:

"La comunidad indígena tzotzil radicada en el municipio de San Pablo Chalchihuitán del estado de Chiapas vive horas de zozobra y terror por la muerte de once campesinos a manos de agitadores del Partido Socialista Unificado de México acaecido el 24 de marzo de este año, por haberse negado a ser afiliados a dicho partido.

"Como estos agentes subversivos se encuentran armados y nuestro municipio no dispone de fuerzas de seguridad pública que garanticen la tranquilidad, recurrimos en demanda de auxilio para que se les expulse y se brinde a la comunidad la protección necesaria para restablecer la paz".

Firman el comunicado, entre otras personas, Nicolás López Gómez, presidente municipal, Manuel Rodríguez Sánchez, síndico, y Domingo Gómez López, presidente del comisariado de bienes comunales. El mismo día en que apareció en un diario capitalino tal desplegado, en otros órganos de prensa se notificaba que la Procuraduría de Justicia de Chiapas había hecho detener, por considerarlos culpables de esa matanza, a un grupo de doce personas, entre ellas las tres que acusaban a los miembros del PSUM de ser los asesinos.

No queremos entrar hoy en la dilucidación del caso. Bastaría para echar por tierra la versión de los acusadores hoy detenidos, la puerilidad de la razón en que dicen se originó la matanza, que habría sido la negativa de las víctimas para afiliarse al PSUM, como si un acto de esa naturaleza fuese posible sin ejercer sobre los agredidos una coacción constante, imposible si se carece del poder político. Es altamente probable, entonces, que se trata de un típico "grito de alarma preferido por el ladrón para evitar ser reconocido como tal.

Si referimos ahora ese hecho, es porque embona muy claramente en la actual enturbiada situación política de Chiapas, en donde está creándose un clima de deliberada confusión. Personas avezadas en la observación cotidiana de los sucesos públicos en Chiapas creen haber advertido una sorda campaña de desestabilización, que no necesariamente crea los conflictos pero sí aprovecha la diversidad de ellos, latente en esa entidad, para provocar que el gobierno se declare incapaz de afrontarlos y se marche.

El origen de la situación se remonta al momento en que se decidió el relevo del gobierno estatal, el año pasado. La designación del general Absalón Castellanos Domínguez quebró las aspiraciones de dos grupos de poder político y económico de notable vigencia en aquella entidad, identificados con dos de los más recientes gobernadores, el doctor Manuel Velasco Suárez y el señor Juan Sabines. No digo, especialmente en relación con el primero, que él personal y directamente encabece un grupo político, pero sí que actúa uno compuesto por funcionarios que colaboraron con su administración. Debida a la intrincada maraña de intereses económicos y el gobierno del Estado, ninguno de los dos grupos quedó conforme con la designación del militar, y aunque ellos mismos entre sí antagonizaron en el pasado, hoy coinciden sus acciones en dar pábulo a problemas regionales, y magnificarlos en los medios de difusión, para obligar al gobierno a marcharse, de tal suerte que se abra ante ellos, más pronto de lo legalmente establecido, de nuevo la oportunidad de entrar en el gobierno.

Salvo la figura y la acción del secretario de Educación del gobierno chiapaneco, Javier López Moreno (cuya convicción democrática lo llevó a escribir entusiasta e inteligentemente dos libros sobre *La reforma política*), el gobierno de Chiapas se ha forjado una imagen que ayuda a que sus adversarios lo presenten como represor. Al gobernador lo ve con temor buena parte del público por su carácter castrense. Para colmo, nombró secretario general de gobierno a Javier Coello Trejo, que en la capital ganó fama como Fiscal de Hierro, y que es hombre más dado a la, digamos, persuasión imperativa que a la negociación. De cualquier modo, su actuación no ha sido peor que la de sus antecesores, y mientras constituyan el gobierno legal debe denunciarse el cúmulo de tentativas por ponerlo en conflicto, máxime si ello se busca poniendo irresponsablemente en riesgo la vida de muchas personas y la precaria paz de esa entidad de régimen feudal que se llama Chiapas.